

Visión de país

Una Bolivia productiva, institucional, descentralizada y abierta al futuro

Llevo años pensando y escribiendo sobre Bolivia. Primero desde la experiencia del sector privado, defendiendo a quienes producen, invierten y generan empleo. Después, a medida que la crisis se hizo más honda, entendí que defender a un sector ya no bastaba: había que pensar el país entero. No pretendo tener todas las respuestas. Pretendo aportar a la apertura de una conversación, responsable y valiente sobre nuestro futuro.

Bolivia necesita dejar de discutir solo desde la coyuntura. Necesita volver a hacerse preguntas de fondo: qué país queremos construir, cómo vamos a producir, cómo vamos a educar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a convivir, cómo vamos a gobernarnos y cómo vamos a insertarnos en un mundo que cambia más rápido que nuestras instituciones.

Mirar el país con honestidad

Durante demasiado tiempo confundimos crecimiento con desarrollo, estabilidad aparente con solidez, discurso con transformación, control estatal con progreso. Los resultados están a la vista: una economía debilitada, instituciones erosionadas, informalidad creciente, empleo precario y una sociedad cada vez más fragmentada.

No se trata de administrar mejor el fracaso. Se trata de atrevernos a transformar sus causas.

Bolivia no puede seguir dependiendo de ciclos externos, rentas agotables, subsidios insostenibles, decisiones improvisadas ni conflictos que paralizan al país. El desarrollo requiere algo más profundo: una economía capaz de generar riqueza, un Estado capaz de garantizar reglas, una sociedad capaz de valorar el trabajo y una democracia capaz de procesar sus desacuerdos sin destruirse.

El desarrollo empieza por producir

Bolivia no saldrá adelante si no vuelve a producir, invertir, exportar, innovar y generar empleo digno. Eso exige un sector privado fuerte, formal y competitivo. No como sustituto del Estado ni como actor privilegiado, sino como parte esencial de cualquier proyecto serio de desarrollo. Donde hay empresa formal, hay trabajo protegido, impuestos, tecnología, productividad y oportunidades.

El falso dilema entre lo público y lo privado nos costó dos décadas. La ruta verdadera es la complementariedad: un Estado que ponga reglas claras y un sector privado que arriesgue, invierta, innove y genere valor.

El país necesita pasar de una economía sostenida por consumo, deuda y recursos naturales a una economía basada en productividad, diversificación, exportaciones, tecnología y capital humano. Necesitamos producir más, pero también producir mejor: con mayor sofisticación, con mercados externos, con cadenas productivas, con financiamiento inteligente para emprendedores y PyMEs, y con una cultura empresarial moderna, responsable y abierta al mundo.

Trabajo, educación y movilidad social

El desarrollo no se mide únicamente en cifras macroeconómicas. Se mide en la vida concreta de las personas: en si un joven puede conseguir empleo, si una familia puede progresar, si un trabajador puede salir de la informalidad, si una mujer puede acceder a oportunidades reales, si un emprendedor puede convertir una idea en proyecto y si un niño puede educarse para un mundo que ya cambió.

Bolivia necesita repensar profundamente su relación entre educación, trabajo y futuro. No basta con entregar títulos si esos títulos no se traducen en capacidades, empleabilidad, innovación y autonomía. No basta con hablar de juventud si el país no crea condiciones para que los jóvenes emprendan, trabajen, investiguen, creen empresas, generen tecnología y participen en las decisiones que definirán su propio destino.

La educación debe dejar de preparar a los bolivianos para un mundo que ya no existe. Debe formar ciudadanos críticos, trabajadores competentes, emprendedores con visión, líderes con responsabilidad social y personas capaces de aprender durante toda la vida. El país necesita educación técnica, formación profesional pertinente, competencias digitales, pensamiento productivo y una cultura que valore la creatividad, la disciplina, el esfuerzo y la cooperación.

También debemos modernizar nuestra legislación laboral. Proteger al trabajador no puede significar condenarlo a la informalidad. Y dar certeza al empleador no puede significar desconocer derechos. El desafío es construir un nuevo contrato social del trabajo: justo, equilibrado, moderno, inclusivo y capaz de convertir el empleo digno en la base real del desarrollo.

Valores para una sociedad que quiere salir adelante

La crisis boliviana no es solo económica o institucional. También es una crisis de valores públicos. Hemos normalizado la violencia como método de presión, la informalidad como refugio, la viveza como estrategia, el bloqueo como argumento, el abuso como derecho y la

desconfianza como forma de convivencia.

Una sociedad que quiere desarrollarse necesita recuperar valores simples pero decisivos: respeto a la ley, trabajo honesto, esfuerzo, responsabilidad, mérito, diálogo, tolerancia, cumplimiento de la palabra y compromiso con la comunidad.

No hay país posible si la fuerza reemplaza a la razón. No hay inversión si la propiedad no se respeta. No hay convivencia si cada grupo impone sus demandas por presión. No hay democracia si la deliberación se sustituye por amenaza. Y no hay futuro si los ciudadanos dejan de creer que el esfuerzo legal y productivo vale la pena.

Bolivia debe reconciliarse con la idea de crear riqueza. La riqueza bien creada, bien distribuida y bien regulada no es enemiga de la justicia social: es una condición para sostenerla. Sin producción no hay empleo; sin empleo no hay movilidad social; sin impuestos no hay Estado; sin Estado eficiente no hay derechos sostenibles.

Sin instituciones ni justicia no hay futuro

La economía no se sostiene sola. Ninguna inversión prospera donde no hay reglas claras, justicia independiente, seguridad jurídica y respeto a la propiedad. He visto demasiadas leyes nacer bajo sospecha, sobrevivir bajo presión y desaparecer antes de aplicarse. Una norma que cambia con cada bloqueo no es una regla: es una negociación permanente.

La justicia es el corazón de cualquier proyecto nacional. Sin justicia independiente, no hay democracia real; sin jueces idóneos, no hay seguridad jurídica; sin transparencia, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión; y sin inversión, no hay empleo ni desarrollo sostenible.

La reforma judicial no puede seguir siendo una consigna. Debe convertirse en una prioridad nacional. Bolivia necesita un sistema de justicia independiente, accesible, profesional, transparente y eficiente. Un sistema que proteja derechos, resuelva conflictos, sancione delitos, garantice propiedad, combata la corrupción y devuelva al ciudadano la certeza de que la ley vale más que el poder.

Sin justicia no hay libertad ni igualdad verdadera. Hay abuso, impunidad y miedo. Y un país que vive con miedo no invierte, no crea, no innova y no confía.

Un Legislativo capaz de procesar el futuro

La crisis institucional también se expresa en el debilitamiento del Poder Legislativo. La Asamblea Legislativa debería ser el espacio donde convergen la representación ciudadana, la deliberación democrática y la construcción de consensos. Sin embargo, ha perdido capacidad

para legislar con calidad, fiscalizar con eficacia y representar genuinamente a la sociedad.

Un país que necesita reformas profundas no puede tener un Parlamento atrapado en la improvisación, la fragmentación, la irrelevancia normativa y la ausencia de consecuencias. Bolivia necesita un Legislativo legítimo, profesional, transparente, responsable y conectado con la sociedad.

La transformación del Legislativo no es un asunto administrativo. Es una condición estratégica para la gobernabilidad. Sin un Parlamento capaz de procesar acuerdos, fiscalizar al Ejecutivo, escuchar a la ciudadanía, planificar su agenda y aprobar leyes útiles, las grandes reformas quedarán atrapadas entre el diagnóstico y la frustración.

El país necesita una Asamblea que legisle con idoneidad, que fiscalice con consecuencias, que consulte de manera sistemática, que rinda cuentas y que vincule su trabajo con las prioridades reales del desarrollo: justicia, economía, educación, salud, medio ambiente, empleo, institucionalidad y bienestar.

Descentralización y autonomías con capacidades reales

Bolivia tampoco puede construir futuro desde un centralismo agotado. La autonomía fue una promesa de redistribución del poder, de desarrollo territorial y de mayor cercanía entre el Estado y la ciudadanía. Pero esa promesa quedó incompleta.

El problema no se resuelve únicamente repartiendo porcentajes de recursos. La autonomía no puede reducirse a una fórmula contable. Requiere pacto fiscal, competencias claras, capacidades institucionales, proyectos productivos viables, capital humano, transparencia y sostenibilidad.

Muchas regiones, municipios y comunidades enfrentan realidades profundamente distintas. Algunas tienen base productiva, población concentrada e infraestructura. Otras enfrentan dispersión territorial, baja capacidad de recaudación, migración, pobreza, dependencia de transferencias y ausencia de servicios. Tratar igual a territorios desiguales puede profundizar las desigualdades.

Por eso Bolivia necesita una descentralización responsable: más recursos, sí, pero también más capacidades; más autonomía, sí, pero también más institucionalidad; más poder local, sí, pero también más rendición de cuentas. El objetivo no debe ser solo distribuir dinero, sino construir desarrollo regional, cohesión territorial y presencia efectiva del Estado en todo el país.

Un país fragmentado territorialmente pierde soberanía, seguridad y futuro. Una Bolivia integrada necesita regiones fuertes, municipios viables, autonomías funcionales y un Estado que acompañe el desarrollo local sin asfixiarlo.

Bolivia en América Latina y el mundo

Bolivia debe dejar de mirar al mundo con miedo, ideología o improvisación. Necesitamos una inserción internacional pragmática, inteligente y orientada al desarrollo.

El mundo necesita alimentos, energía, minerales estratégicos, biodiversidad, agua, talento y soluciones productivas. Bolivia tiene mucho de eso, pero no ha logrado convertirlo en prosperidad sostenida. La integración no puede ser solo diplomacia declarativa. Debe traducirse en mercados, inversión, tecnología, logística, acuerdos comerciales, cooperación técnica y oportunidades para nuestros productores.

América Latina sigue siendo nuestro espacio natural, pero debe ser vista con realismo. MERCOSUR ofrece oportunidades, pero también exige adecuación normativa, competitividad y capacidad exportadora. La CAN sigue siendo un mercado cercano y estratégico. Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay no son solo vecinos: son socios inevitables en comercio, energía, logística, puertos, agroindustria y cadenas regionales de valor.

Bolivia debe relacionarse con todos desde sus intereses nacionales. Con Estados Unidos, puede abrir cooperación, mercados e inversión. Con la Unión Europea, debe fortalecer vínculos en transición energética, institucionalidad democrática, cambio climático y exportaciones. Con China, India, Corea del Sur y Asia, debe buscar inversión, tecnología y mercados, evitando dependencias que no generen valor agregado.

No se trata de elegir entre bloques por afinidad ideológica. Se trata de construir una política exterior útil para el desarrollo nacional. Una Bolivia abierta al mundo debe exportar más, atraer mejor inversión, integrarse a cadenas productivas, defender sus intereses y actuar con seriedad diplomática.

Una nueva forma de construir acuerdos

Bolivia debe superar la falsa confrontación entre Estado y empresa, entre trabajadores y empleadores, entre regiones y gobierno central, entre oficialismo y oposición, entre campo y ciudad. Mi trayectoria me enseñó que los acuerdos duraderos no se imponen: se construyen escuchando, incluso a quien piensa distinto.

Necesitamos diálogo, pero no decorativo: honesto, técnico, orientado a resultados. Acuerdos nacionales capaces de enfrentar la informalidad, la crisis fiscal, la educación, la productividad, la justicia, la descentralización, la modernización laboral y nuestra inserción en el mundo.

La salida pasa por reemplazar la lógica de la fuerza por la lógica de la deliberación. Por entender que ningún sector, partido, región o gobierno puede reconstruir Bolivia por sí solo. El país necesita acuerdos amplios, pero también decisiones firmes. Necesita escuchar, pero

también actuar. Necesita consensos, pero no excusas para postergar indefinidamente lo urgente.

Futuro

Bolivia no es pobre. Tiene un problema de conversión. Somos un país extraordinariamente rico que todavía no ha cobrado su herencia. Y esa herencia no es un destino: es un desafío de gestión, de instituciones, de decisiones. Los desafíos de gestión se resuelven.

Nuestra mayor amenaza no es la falta de recursos, sino el pesimismo. Cuando una sociedad pierde la fe en sí misma, renuncia a sus posibilidades y elige a los peores para gobernarla. Por eso dejar de creer sería nuestro mayor fracaso.

Creo en una Bolivia que produzca, eduque, trabaje y exporte. Una Bolivia con justicia independiente, instituciones confiables y democracia efectiva. Una Bolivia donde las regiones puedan desarrollarse, donde los jóvenes no tengan que irse para encontrar futuro, donde el trabajo formal sea posible, donde la empresa sea valorada, donde el Estado funcione y donde la ley sea más fuerte que el abuso.

*«La pregunta no es si Bolivia tiene futuro. La pregunta es cuándo
decidiremos construirlo.»*